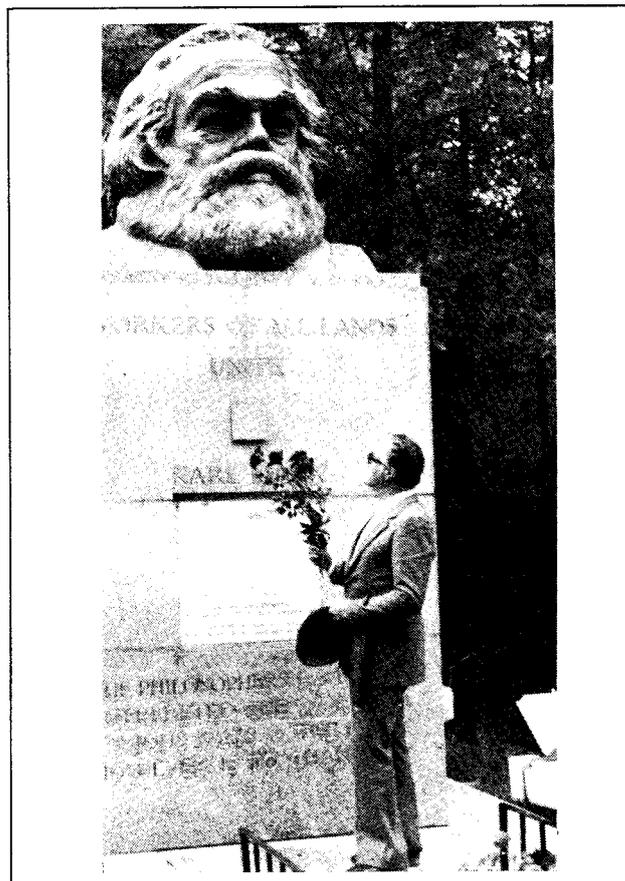


SALVADOR ALLENDE: HEROE NACIONAL

Belarmino Elgueta. Ex-diputado del Partido Socialista de Chile. Autor de artículos y libros sobre temas políticos.



Las revoluciones victoriosas proyectan, como legado, instituciones más avanzadas a las sociedades que remecen; las revoluciones transitoriamente derrotadas a su vez dejan enseñanzas que, si se saben aprovechar, asegurarán su triunfo en el futuro, las cuales deben extraerse mediante un análisis cuidadoso de esas derrotas. Sin embargo, para que el análisis sea fecundo, no puede realizarse desde un punto de vista dogmático —como ha ocurrido predominantemente en el caso chileno entre los medios de izquierda— basado sólo en consideraciones absolutas acerca de la idea de la revolución. Por el contrario, con una posición como ésta, la apuesta está ganada de antemano, ya que es difícil, por no decir imposible, contradecir las críticas negativas. Ciertamente, dicho resultado se obtiene con el deliberado olvido de que este proceso no se inscribe en ningún arquetipo de aquellos que inflaman de entusiasmo, como la comuna de París o la revolución bolchevique, sino que corresponde a una experiencia singular y concordante con nuestro desarrollo nacional.

La única manera de analizar situaciones como la que

vivió Chile, entre 1970 y 1973, para extraer conclusiones útiles, es por lo mismo la de un punto de vista histórico, esto es, fundado en consideraciones objetivas concernientes a la experiencia misma y las circunstancias en que se desarrolló y por las cuales fue condicionada. En este sentido y en el marco de un bien entendido policentrismo, es correcto hablar de la experiencia de la Unidad Popular como una “vía chilena” al socialismo, sin confundirla por cierto con la vía pacífica en los términos en que ha sido formulada por el partido comunista.

Este proceso no fue, en efecto, el resultado de la casualidad, sino que tuvo sus antecedentes en un período de germinación. “Toda revolución opera en el medio ambiente que la ha producido y sobre los materiales que encuentra en ese medio ambiente”. ‘Estamos construyendo un nuevo orden’, gustaba decir Lenin, ‘con los ladrillos que el antiguo orden nos ha dejado...’ El pasado se refracta a través de la obra innovadora de la revolución, no importa cuán audaces sean las innovaciones”.¹

Convergencia núms 3-4, México, agosto-octubre de 1981.

El movimiento popular actuó, por eso, de la única manera que podía hacerlo, de acuerdo a su propia evolución. En este sentido, corresponde también considerar a Salvador Allende, en cuanto intérprete y conductor de dicho movimiento, como producto de un doble proceso que lo condiciona: el escenario histórico y el proyecto nacional de su partido. Sólo ubicado en dicho prisma es posible juzgar su comportamiento como gobernante. Cualquier análisis que prescindiera de esta realidad objetiva no ayuda a extraer lecciones para el futuro. La vida política de Allende se enmarca, en efecto, en un período de ascenso vertiginoso de las luchas de los trabajadores, comprendido entre 1931 y 1973, que es preciso examinar —aunque sea de manera por demás somera— refiriendo particularmente este análisis al desarrollo del socialismo chileno.

Escenario histórico

Sin desconocer los antecedentes históricos que se remontan al siglo pasado, en que emerge la conciencia social de las masas, la gran crisis de 1929-1931 puso en evidencia las contradicciones del sistema capitalista y generó condiciones favorables a la perspectiva socialista. Desde la caída del general Carlos Ibáñez en el último de aquellos años, la doctrina socialista se extendió, en efecto, entre los núcleos obreros y en los sectores medios ilustrados, surgiendo diversos grupos que sostenían sus postulados y realizaban una intensa propaganda en las organizaciones obreras. Estos grupos se vincularon con el descontento existente entre los militares nacionalistas, desarrollando un movimiento revolucionario que proclamó el 4 de junio de 1932 la república socialista.

El fervor popular se extendió, y el programa de gobierno —aunque difuso— ayudó a desarrollar la conciencia revolucionaria que habrá de influir decisivamente en la izquierda. Proliferaron nuevos organismos en la base social que, junto con ofrecer su apoyo a la república socialista, exigieron soluciones concretas a sus problemas. Pero la burguesía interna y los consorcios extranjeros, apoyados por el sector oligárquico de las fuerzas armadas, dieron un contragolpe el 16 de junio del mismo año poniendo término al ensayo revolucionario.

El pensamiento socialista se expandió en el país en el lapso transcurrido entre 1931 y 1933 sin un movimiento obrero estructurado y sin un partido poderoso, capaz de orientar y conducir a las masas. En estas circunstancias, se fundó el Partido Socialista el 19 de abril de 1933 para poner fin a la crisis de dirección de la clase trabajadora. La república socialista había dado un vigoroso empuje a las multitudes desposeídas, arraigando en ellas su programa. Por eso, ella explica, a pesar de su derrota, la fundación y crecimiento del Partido Socialista.

Esta organización política ha participado, durante más de cuatro décadas, en el desarrollo del movimiento popular, aportando pensamiento y acción. Ha compartido sus triunfos y ha sido solidaria con sus derrotas, dispuesta siempre tanto a reconocer sus errores como a destacar sus aciertos. Así, ha asimilado con las masas experiencias decisivas, viviendo momentos de esperanza y desesperanza, que se repiten una y otra vez. Después de su colaboración en los gobiernos de frente popular, recuperó su impulso

revolucionario y se convirtió en oposición al sistema socio-político imperante.

El Partido Socialista ha desarrollado un proyecto nacional. Este proyecto se esbozó ya en la república socialista de 1932 y culminó en el programa básico de gobierno de 1970. Los hombres de la revolución socialista, en efecto, caracterizaron el estado de la economía del país al tiempo que afirmaron la conciencia antimperialista que se venía formando desde los días del Centenario, cuando los grandes precursores del pensamiento social promovieron resonantes controversias sobre el desarrollo nacional.

El programa de acción económica inmediata ofrecido al pueblo en 1932 expresó dicha voluntad. “Todo ha sido entregado sistemáticamente al extranjero”, señaló, a consecuencia de lo cual la administración del crédito, el ejercicio del comercio interno y externo, el control de los salarios y el mercado del trabajo “se han escapado de nuestras manos”. La situación era más grave aún. Las empresas extranjeras se habían apoderado ya de todas las actividades productivas de materias primas y una gran parte de los servicios públicos.²

He ahí el balance de una economía dependiente, caracterizada por el abismo abierto entre la prodigalidad burguesa y el pauperismo obrero.

El programa de los revolucionarios del cuatro de junio de 1932 define el carácter antinacional de la burguesía. El monopolio del comercio por las casas extranjeras —expresa— las ha llevado a ser árbitros de los precios de nuestro mercado, arma que ha sabido esgrimir para esquilmar a los productores y esclavizar a los consumidores, concluyendo con un juicio lapidario.

Nuestra clase privilegiada ha vivido embriagada con los lujos y la molicie que le proporcionaba el capitalismo extranjero a cambio de nuestras riquezas naturales y de la miseria del pueblo. Por eso, en la advenediza burguesía de Chile, más que en ningún país que se diga libre, se ha evidenciado un mayor respeto por todo lo que no es nacional.³

Es el retrato hablado de la burguesía cipaya.

Fundamentos de un programa

En 1947, el Partido Socialista aprobó un programa dentro de un riguroso marco teórico, cuya fundamentación ha sido analizada en otros trabajos. En esta oportunidad, sólo queremos referirnos a la perspectiva de nuestro país proyectada por dicho documento. Después de contrastar la situación paradójica de Chile, en el contexto de América Latina, como un país adelantado en el orden institucional, pero subalterno en sus bases naturales de progreso material, afirma que esto último le impide desempeñar en la determinación de los destinos comunes la función rectora que conforme a la primera condición debiera tener.⁴

Esta situación obliga a Chile a no apartarse en la consideración de sus problemas del punto de vista continental. En el marco de la lucha por la unidad del subcontinente, el Partido Socialista postuló entonces el desarrollo de una economía orgánica antimperialista.

La política socialista en la América Latina —dice— tiene un doble significado: es el único medio eficaz para la emancipación de las masas obreras y campesinas y la única garantía cierta de nuestra independencia nacional y continental.⁵

Para lograr estos objetivos, el programa formuló dos

líneas de acción en el marco de la lucha por el poder, mediante la organización de los trabajadores. La primera preconizó la nacionalización de las industrias básicas, la reforma agraria, el manejo estatal de los servicios públicos, especialmente de los de seguridad social, salubridad y educación. La segunda, una activa industrialización, técnicamente planificada, contando para ello con las condiciones naturales del medio geográfico y las aptitudes predominantes de la población. La convergencia y movilización de las fuerzas sociales comprometidas con estos objetivos se orientarán, previamente, hacia la conquista del Estado y su reestructuración.

Este proyecto nacional alcanzó su máximo desarrollo en el programa básico de gobierno de la Unidad Popular, aprobado el nueve de octubre de 1969. Este instrumento parte de un diagnóstico de la realidad nacional. Ella es caracterizada como de profunda crisis, que se manifiesta esencialmente en la pobreza generalizada y en la injusta distribución de los bienes, expresiones concretas que a su vez están condicionadas por una economía capitalista dependiente del imperialismo que lleva implícita su incapacidad de crecimiento. En esta forma, surge la contradicción fundamental entre los recursos materiales y humanos potenciales del país y su estado de subdesarrollo, que sólo puede superarse mediante el socialismo.

Por eso, el programa proclamó:

La única alternativa verdaderamente popular y, por lo tanto, la tarea fundamental que el gobierno del pueblo tiene ante sí es terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile.

Así, en el programa se planteó la lucha por el socialismo como un proceso ininterrumpido, en el que se combinan las tareas nacionales y democráticas —no cumplidas por la burguesía— con las tareas socialistas, concepción sostenida con tenacidad por el Partido Socialista.

De este modo, el cambio en la sociedad se realizará a través de las relaciones de clase, de la movilización de las fuerzas populares contra los intereses monopolistas —nacionales y extranjeros—, para romper las actuales estructuras y avanzar hacia el socialismo. Este proceso responde, pues, a una agudización de las contradicciones del sistema capitalista dependiente, de la lucha de clases, en procura del traspaso del poder a las fuerzas populares. En el programa, la concepción del Estado y la nueva organización política se definen por consiguiente en términos de proceso.

Esta misma concepción se presentó en el ámbito de la economía. La lucha política se planteó entonces de manera alternativa: continuar con el modo de producción capitalista o sustituido por el socialista. En esta perspectiva, el programa perseguía objetivos económicos inmediatos, como la nacionalización de las riquezas básicas, de las empresas monopólicas y estratégicas, de los latifundios y de la banca; objetivos a mediano plazo, como las concernientes a la sustitución de la estructura capitalista por la socialista, y objetivos coyunturales, como el aumento de la producción, la reducción de la cesantía, la disminución de la dependencia económica, etcétera. Del avance de aquellos dependería el éxito de estos últimos.

El programa señaló claramente, por último, sus objetivos de política internacional dirigidos a afirmar la plena autonomía política y económica de Chile, a mantener relaciones con todos los países del mundo sobre la base del respeto a la autodeterminación y a los intereses nacionales, a esta-

blecer vínculos de solidaridad con los pueblos dependientes o colonizados, a promover un fuerte sentido latinoamericano y antimperialista y a reforzar las relaciones, el intercambio y la amistad con los países socialistas. Esta política exterior debía promoverse como la acción de pueblos antes que de cancillerías.

Dialéctica del proceso

La década de los setenta marcó el vórtice de la crisis del estado burgués. Durante ella se produjo, en efecto, el máximo ascenso del movimiento popular en el camino hacia el poder; pero como contrapartida la burguesía, apoyada en las fuerzas armadas, instauraría la más brutal dictadura. El gobierno popular condujo un proceso de cambios socioeconómicos que duró mil días, impulsado por las masas, que se derrumbó con el golpe militar de 1973. El capitalismo salvaje destruyó desde sus cimientos todas las conquistas democráticas, imprimiéndole al Estado una connotación de contrainsurgencia. Es la colisión definitiva de los proyectos históricos de la burguesía y de los trabajadores.

Salvador Allende accedió al gobierno como culminación de un proceso democrático, inscrito en una acentuada lucha de clases, que exhibe dialécticamente aspectos contradictorios. El movimiento popular había avanzado, en efecto, en medio de las contradicciones interburguesas, las que buscaban a su vez la neutralización de dicho movimiento, unas veces mediante la represión y otras por medio del compromiso. De este modo, se crearon espacios políticos dentro de los cuales se discutía, bajo ciertas reglas, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional y en el juego político.

Esta larga marcha facilitó la formación de la conciencia social de las masas y trajo consigo importantes conquistas parciales, logradas en una constante lucha de clases. Son los aspectos positivos. No obstante, esta forma de inserción en la dinámica de la sociedad capitalista produjo su contrapartida, convirtiendo por largo tiempo a los trabajadores en soporte político de una fracción burguesa e inculcándoles una confianza exagerada en la democracia formal. Son los aspectos negativos.⁶

Entre dos golpes

El gobierno popular desarrolló su programa entre dos golpes militares. El primero se frustró con el asesinato del comandante en jefe del ejército Rene Schneider en octubre de 1970 por un comando de derecha. El segundo, tres años después, derrocó al gobierno de la manera más sangrienta, con la intervención de las mismas fuerzas sociales, económicas, políticas y militares que se movieron en el primero. En ambos quedó en evidencia la inspiración, financiamiento y asesoría de los aparatos del imperialismo y de la institucionalidad burguesa, los que combinaron, en el interior y en el exterior, el sabotaje económico con el bloqueo financiero, las maniobras de desestabilización política con las campañas de propaganda mixtificadora, el terrorismo con el apoyo logístico.

Los militares actuaron como la fuerza de choque de la alianza burguesa, contrariando todas las exhortaciones, no sólo del Presidente, sino también de los partidos populares,

hacia el respeto a las reglas del juego democrático. En su diario, el general Prats anotó el 27 de agosto de 1973:

Creo que ni el presidente Allende ni los partidos de la UP saben cuán profunda es la influencia estadounidense en nuestras fuerzas armadas y especialmente en la mentalidad del militar chileno. Esa influencia sin contrapeso [...], es un factor que puede jugar un papel terriblemente negativo en los próximos acontecimientos.

Se sabía entonces en la izquierda que sólo un ejército popular como en Cuba y Nicaragua, podría garantizar el proceso revolucionario, pero la orientación general de éste y la sucesión consiguiente de los acontecimientos no dio lugar a su formación. Esta fue su mayor debilidad.

La contrarrevolución de 1973 no fue producto exclusivo del designio de Pinochet y de la acción de las fuerzas armadas, sino que correspondió más bien a un profundo trastorno social que puso en tensión a todos los elementos en que descansa la sociedad de clases. De la misma manera que en el derrocamiento del Presidente Balmaceda en 1891, todos los partidos tradicionales, representativos de los distintos segmentos de la burguesía, favorecieron el golpe militar que abatió al gobierno popular. Su papel en este drama histórico consistió en preparar el clima social y político que ofreciera una coartada a la conspiración, por medio de la más grotesca farsa en torno a la defensa del estado de derecho.

Esta ruptura también se expresó en las fuerzas armadas, a pesar de su organización jerarquizada y del verticalismo de sus mandos. Ciertamente, la unidad del pueblo y los sectores más conscientes de las fuerzas armadas que encarnara Grove en 1932 se expresaron —40 años después— en la resistencia en los cuarteles o en la renuencia de muchos leales hombres de armas a sumarse al golpe, que Pinochet y sus secuaces se ven obligados a reducir a cañonazos o con viles persecuciones.

El complejo de culpa por los males causados al país con el golpe militar induce a muchos —la Democracia Cristiana, entre ellos— a ignorar al gobierno de Allende cuando hacen comparaciones entre el pasado y el presente, entre el período anterior al 11 de septiembre de 1973 y el período posterior a dicha fecha. Este mecanismo psicológico para borrar de la memoria colectiva el recuerdo de los mil días de Allende es particularmente patente en los análisis de Eduardo Frei. El gobierno popular no existe, para ellos, en el horizonte histórico. No quieren reconocer que su obra, a pesar de su brevedad en el tiempo y de la resistencia interna y externa, es una de las más trascendentales en nuestro desarrollo nacional, constituyendo ella, por lo mismo, objetivo de reconquista.

Esta obra resiste cualquier comparación, incluso algunas que parecen imposibles por la distinta naturaleza de los intereses y valores que persiguen los respectivos sistemas. Resulta de interés, con todo, un paralelo entre la democracia obrera y la dictadura burguesa, entre el socialismo humanista y el capitalismo salvaje, entre el presente convertido en pasado mediato y el pasado inmediato convertido en porvenir, entre la obra de liberación nacional y la acción de entrega al imperialismo, entre la lealtad y la traición a Chile. Aunque un paralelo entre Allende y Pinochet es imposible, conviene mostrar los rasgos que diferencian su posición ante la historia, el carácter distinto de sus respectivas políticas.



Obra revolucionaria

El gobierno popular, en un corto lapso, nacionalizó las riquezas básicas del país, entre ellas el cobre, sin indemnización. Expropió en algunos casos, requisó e intervino en otros, las más importantes empresas industriales monopólicas y/o que condicionaban el desarrollo económico nacional, conformando un área de propiedad social predominante. Expropió a la oligarquía terrateniente, entregando la tierra a los campesinos. Socializó los bancos, pasando a controlar el sistema financiero. Incorporó plenamente a las masas al trabajo y al consumo, ampliando el mercado interno. Extendió las libertades y derechos políticos, así como la cultura, hasta hacer de Chile la más avanzada democracia del continente.

En el período 1970-73, Chile tuvo relaciones diplomáticas con todos los países del mundo y procuró diversificar sus vinculaciones económicas para enfrentar las dificultades internas y externas derivadas de la ejecución del programa de transformaciones socioeconómicas. Asimismo, se incorporó al movimiento de Países No Alineados, asegurando su autonomía y libertad de acción en materia de relaciones internacionales. De este modo, el gobierno popular contrarrestó además la campaña maliciosa de la oposi-

ción conspirativa que trataba de presentarlo como satélite soviético.

Como réplica a la política de las fronteras ideológicas promovida por Estados Unidos, el gobierno popular planteó las relaciones interamericanas en el marco del pluralismo ideológico, logrando óptimos resultados. En muchas materias, sostuvo posiciones comunes a los países andinos, así como con países ajenos al Acuerdo de Cartagena (México y Cuba). Las relaciones con los países limítrofes o contiguos, con quienes Chile tiene conflictos latentes que se arrastran desde el siglo pasado, alcanzaron contornos de verdadera amistad, arribando a un acuerdo con Argentina sobre arbitraje en el problema del Beagle.⁸

Protagonista de este profundo proceso de cambios fue la clase trabajadora. Por su participación, a través de sus partidos, de sus organizaciones sindicales y de sus nuevos organismos generados durante esta viva experiencia social, fue posible tal hazaña política. No pudo continuar con las tareas socialistas contenidas en su programa, porque la correlación de fuerzas no le permitió desarrollar plenamente sus órganos de poder alternativos al poder burgués, que sólo alcanzaron a germinar, así como por la carencia de una dirección política resuelta a encarar la lucha final por el poder.

Alcances de la contrarrevolución

La contrarrevolución irrumpió con una violencia salvaje, demoliendo el estado democrático-burgués existente hasta 1973. Para ello, ya no respetó la división clásica de los poderes del estado, sino que se proyectó a través de dos ramas centrales en las que se toman decisiones. La primera es la militar, que funciona de acuerdo con la estructura vertical de este aparato, teniendo a la cabeza el estado mayor de las fuerzas armadas, compuesta de un consejo de seguridad nacional y de los servicios de inteligencia, en los cuales predominan los militares. La segunda es la rama económica, constituida por los ministerios técnico-económicos y las empresas estatales, órganos que pueden ser atendidos tanto por civiles como por militares en su carácter de tecnócratas, que representan políticamente al capital.⁹

Conforme a esta estructura, el gobierno militar revistió al Estado burgués de las formas más represivas imaginables, poniendo término a la democracia representativa que el gobierno popular había llevado a su más alta expresión. En este sentido, suprimió las libertades públicas y los derechos humanos, clausuró el congreso nacional, asumió las atribuciones constituyente y legislativa, supeditó a su autoridad a los tribunales de justicia y a la contraloría, intervino las universidades, ilegalizó a los partidos populares, disolvió la Central Única de Trabajadores y las federaciones obreras y campesinas, limitando el funcionamiento de los sindicatos.

Para asegurar la eficacia política de estas medidas, la dictadura organizó la represión masiva y sistemática. Desde el 11 de septiembre de 1973, inició el exterminio físico de miles de chilenos, aplastando el creciente descontento social. En esta operación de guerra de clase ha utilizado la delación, tortura, campos de concentración, juicios militares, fusilamientos, desaparecimiento forzado de detenidos y el toque de queda. Esta política represiva ha producido más muertos que la guerra de independencia o que el conjunto

de las guerras civiles del siglo pasado, así como el éxodo del país de un millón de seres humanos.

Reversión estructural

La dictadura revirtió los cambios estructurales impulsados en la economía por el gobierno popular. Formuló un modelo de desarrollo dirigido, entre otros objetivos, a privatizar y dismantelar el estado empresario. La privatización no se ha detenido en las empresas propiamente tales, que configuraron el área social, sino que se ha extendido a los servicios sociales, como la educación, la salud y la previsión, que se han convertido en lucrativos negocios. En el campo se devolvieron tierras a los latifundistas y se promovió la venta en el mercado de los predios ya asignados a los trabajadores agrícolas, así como se entregaron extensas áreas forestales para su explotación indiscriminada. La única obra importante del gobierno popular que permanece aún en pie es la nacionalización del cobre, aunque Pinochet pagó a las empresas estadounidenses expropiadas 391 millones de dólares por concepto de indemnización.

La privatización de la economía ha resultado, por sobre todas las cosas, en la centralización del poder económico de ciertos grupos y en la consiguiente oligopolización de algunas industrias. Más que en extensión y expansión del poder empresarial, esta centralización del poder económico se traduce en el desplazamiento de sectores de pequeños y medianos empresarios. De otra parte, se ha insertado la economía en el sistema transnacional, estrechando los sectores dominantes internos cada vez más sus relaciones con los consorcios financieros externos, abriendo las venas del país a la succión imperialista al tiempo que operan también en los mercados externos como partes integrantes de dicho sistema.

Para cerrar el círculo de hierro, se ha hecho funcionar la economía a través del mercado. Así, la privatización y su consiguiente concentración económica, la liberación de precios, la sobreexplotación del trabajo, determinaron el traspaso de recursos a la gran burguesía y la reducción de los ingresos reales de los asalariados. Para esto último, se mediatizaron las organizaciones sindicales, se prohibieron las huelgas y se fijaron arbitrariamente las remuneraciones al trabajo. Las fuerzas del mercado fueron liberadas mediante la supresión de todas las facultades reguladoras del estado, presentando este proceso como la suprema expresión de la libertad.

El repudio generalizado ha conducido a la dictadura al aislamiento internacional, que contrasta con el prestigio alcanzado por el gobierno popular en el concierto de las naciones civilizadas. Actualmente, la dictadura no tiene relaciones diplomáticas con los países socialistas, excepto China y Rumania, y con varias naciones democráticas de Europa y América, acentuando su dependencia de EEUU.

La torpe política de la dictadura ha deteriorado gravemente su posición en América Latina hasta el punto de marginarse del Pacto Andino, enfrentar un delicado conflicto con Argentina y hacer muy difíciles las relaciones tradicionales con otros países. A todo ello se agrega la circunstancia infamante de ser condenada, año tras año, por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales por su política genocida.

Transfiguración del héroe

Salvador Allende nació políticamente con el Partido Socialista y condujo a éste a la cima del gobierno. Como Arturo Alessandri, el caudillo de los años veinte, fue un hombre de partido. Ello lo llevaría a repetir, una y otra vez, “todo lo que soy y he sido se lo debo a mi partido y al pueblo chileno”. Recogiendo la voluntad de poder de los románticos conductores de la revolución socialista de 1932, inició una lucha sin tregua por conducir a su partido y a su pueblo hacia la conquista de sus objetivos estratégicos. De manera no deliberada, se produjo una carrera a la Moneda entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, entre Frei y Allende. El primero llegó en 1964, el segundo en 1970, si bien estuvo a punto de lograrlo en 1958.

En medio de este patético proceso, el político se transfiguró en héroe, cuya dimensión es comparable al movimiento mismo del cual fue intérprete y conductor. Allende es, en efecto, un héroe nacional del siglo XX que ha difundido el nombre de Chile con dignidad representativa a todos los confines de la tierra, a través del análisis de aquella experiencia. Ningún otro país de su tamaño ha despertado tanto interés y por un tiempo tan prolongado. Ni la revolución cubana, la primera que rompe las cadenas en América Latina, ni la epopeya de Nicaragua, la segunda revolución victoriosa en el continente.

En el centro de esta preocupación mundial se encuentra la personalidad de Allende. Magnánimo por excelencia, su figura resplandece y conmueve la conciencia de los pueblos y, entre ellos, la del propio Chile. José Ortega y Gasset distingue entre las virtudes de la magnanimidad y las virtudes de la pusilanimidad. Las primeras son aquellas que proyectan al hombre en la historia, que le conceden clarividencia

para avizorar el porvenir, para transformar los ideales en realizaciones. Las segundas se refieren al acatamiento de las normas de urbanidad, de las reglas morales de catecismo, productos por lo general de convencionalismos sociales.

De verdad, se trata de una distinción significativa. “El magnánimo —dice Ortega— es un hombre que tiene misión creadora: vivir y ser es para él hacer grandes cosas, producir obras de gran calibre. El pusilánime, en cambio, carece de misión; vivir es para él simplemente existir él, conservarse, estar entre las cosas que ya están ahí, hechas por otros, sean sistemas intelectuales, estilos artísticos, instituciones, normas tradicionales, situaciones de poder público”.¹⁰ Allende poseía todas las virtudes de la magnanimidad y, en cambio carecía de muchas de la pusilanimidad.

Continuidad histórica

Antes que él, Balmaceda fue un magnánimo en nuestra historia, si bien ambos representan, en realidad la síntesis entre el nacionalismo democrático y el socialismo revolucionario. Este sentido de la continuidad histórica está presente en el pensamiento y la acción de Salvador Allende. En el momento de su victoria electoral, el cuatro de septiembre de 1970, expresó: “Yo sólo tomo en mis manos la antorcha que encendieron otros junto al pueblo, con el pueblo.” La misma idea se repite como una constante. Cuando asumió la Presidencia de la República, reiteró: “Aquí estamos hoy, compañeros, para conmemorar el comienzo de nuestro triunfo. Pero alguien vence hoy con nosotros.” Recorre entonces en emocionada síntesis nuestra historia, mencionan-



Presidente Allende: tierra adentro en busca de los campesinos

do el legado de Lautaro, Caupolicán, O'Higgins, Rodríguez, Balmaceda y Recabarren.

El se presenta, pues, como continuación de un proceso popular que encarnaron en el pasado otros héroes que nos dieron libertad. Consciente de la responsabilidad de este legado, afirmará en la despedida a Fidel Castro en diciembre de 1971:

...defenderé esta revolución chilena y defenderé el gobierno porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Sólo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo.

Así sucedió el 11 de septiembre de 1973, rompiendo todos los precedentes a que estábamos acostumbrados en América Latina.

No obstante, Allende ha sido sometido a las más severas críticas, comprendiendo algunas de ellas burdas simplificaciones. Desde el golpe militar ha proliferado entre quienes tuvieron responsabilidades individuales y colectivas en la conducción del proceso una suerte de filosofía a lo "pilatos", sin la elevación del romano para preguntarse siquiera ¿qué es la verdad? Con ese dogmatismo es fácil sacudirse de las responsabilidades propias. Allende no fue el reformista que se identificó con la política del Partido Comunista ni el único "responsable" de la derrota popular. Mucho menos un camarada de ruta.

Posición frente al comunismo

Desde posiciones de derecha, una de las desfiguraciones más burdas del pensamiento de Allende se refiere a su posición frente al comunismo. Hay, en este sentido, una reiterada tendencia a mostrar al líder socialista más próximo a la política del Partido Comunista que a la de su propio partido. Nada más lejos de la realidad. Allende sostuvo siempre la política diferenciada del socialismo chileno, no sólo con su permanente militancia, sino a través de su discurso personal, aprovechando las más significativas coyunturas para hacer contar dicha congruencia.

En política internacional, las líneas preconizadas por socialistas y comunistas en nuestro país son por lo general divergentes. Es ésta una constante histórica. La más violenta ruptura entre ambos partidos se produjo, precisamente, a raíz del pacto nazi-soviético celebrado el 22 de agosto de 1939, que fue denunciado por el partido socialista como una "traición" de los comunistas a la lucha antifascista, condenando además el reparto de Polonia. Allende era entonces miembro del comité central y ministro de gobierno del Frente Popular.

El Partido Socialista impugnó, en carta del 10. de diciembre de 1943 dirigida al partido comunista, la política de unidad nacional preconizada por éste. En ella analizó también la política de buena vecindad del gobierno de Franklin D. Roosevelt y sus proyecciones en la posguerra, rechazando la idealización hecha por los comunistas, hasta el punto de plegar sus banderas antimperialistas y sostener la posibilidad de contar con la ayuda del capital privado extranjero en el desarrollo de los países latinoamericanos. Criticó la desviación política crónica de su competidor en el movimiento obrero. "Mantenemos, pues, una firme lucha antimperialista —dice— en contraposición a los camaradas comunistas que han pospuesto toda acción programática o

popular a la lucha antifascista. "Esta carta fue suscrita por Salvador Allende, en su carácter de secretario general del partido socialista.

Desde fines de la segunda Guerra Mundial en 1945 y hasta 1973, este partido adoptó frente a la política internacional del comunismo posiciones definidas que contaron siempre con la opinión favorable de Allende. En este sentido, condenó la ruptura del Cominform con Yugoslavia en 1948, el aplastamiento de la revolución húngara en 1956 y la invasión de Checoslovaquia en 1968, sosteniendo los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.

La superchería de la vía pacífica

Desde posiciones de izquierda se atribuye a Salvador Allende la superchería de la vía pacífica al socialismo. Es otra falsificación de su pensamiento y ejecutoria. El sostuvo con su ejemplo —ya no sólo con las palabras— la utilización de todas las vías: conquistó el gobierno por el sufragio y lo defendió con las armas hasta la muerte. Pero el peso de la evolución democrática era fuerte y prolongado en el país.

El propio Allende recordó que el congreso nacional tenía 160 años de existencia, siendo uno de los tres más antiguos del mundo.¹¹ Habría que agregar que el sufragio universal se estableció en 1884. Por esta singularidad pensó en algún momento que Chile contaba con las "instituciones políticas y sociales necesarias para materializar la transición del atraso y la dependencia al desarrollo y la autonomía, por la vía socialista". Así lo expresó el día en que asumió la presidencia de la república.

Pero él no tuvo nunca una confianza ciega en la institucionalidad burguesa, como algunos han tratado de presentarlo. No es en este medio, sino en el fin que persigue en lo que confía. Con orgullo pudo decir, por eso, en el discurso pronunciado en la Universidad de Guadalajara, el dos de diciembre de 1972:

Yo tengo una experiencia que vale mucho. Yo soy amigo de Cuba: soy amigo hace diez años de Fidel Castro, fui amigo del comandante Ernesto "Che" Guevara. Me regaló el segundo tomo de su libro Guerra de Guerrillas; el primero se lo dio a Fidel. Yo estaba en Cuba cuando salió, y en la dedicatoria que me puso dice lo siguiente: "A Salvador Allende que, por otros caminos, trata de obtener lo mismo."¹²

Ni siquiera el "Che" discutía, pues, la existencia de variadas formas de lucha para la conquista del poder. Por lo demás, el mismo destino trágico de Guevara y de miles de mártires de la revolución latinoamericana constituyen un testimonio irrefutable de que la vía en sí no asegura la victoria. En Chile había también una experiencia distinta a la del proceso de 1970-1973: el golpe armado del cuatro de junio de 1932, que fue derrotado después de retener el gobierno por algunos días.

Contradicción por resolver

La trágica paradoja de Allende es que, habiendo comprendido las dificultades para avanzar dentro de la institucionalidad burguesa, no encontró la fuerza suficiente para cambiar de camino en el momento oportuno. "La gran cuestión y que decidirá la suerte de Chile —advirtió en su segundo

mensaje al congreso pleno— es si la institucionalidad actual puede abrir paso a la transición al socialismo.”

Con profunda penetración y clarividencia, agregó en esa misma oportunidad: “No se puede descartar que la escalada contra el régimen institucional llegue a provocar las condiciones de ruptura violenta.”

De que Allende tenía conciencia de esta situación no cabe duda alguna, si bien traducía en sus opiniones una contradicción que hasta hoy la izquierda chilena no ha podido resolver. Se encontrarán muchas expresiones de adhesión hacia el camino del socialismo en democracia, libertad y pluralismo, que son reflejos de la resistencia de su propio partido al autoritarismo represivo del socialismo realmente existente. Pero también no dejó nunca de señalar la necesidad de solucionar el problema del poder. Dirá, por eso, en las conversaciones con Regis Debray cosas inequívocas como éstas: “En la actualidad, el pueblo está en el gobierno y desde él lucha por ganar el poder.”¹³

Nada más condenable pues, que

una imagen de Allende que pareciera dibujada intencionalmente como para que absorba, sin más reflexión, el sueño imposible de la revolución pacífica, del tránsito a lo nuevo sin la destrucción de lo viejo, de la legalidad burguesa capaz de disolverse mansamente en la institucionalidad socialista.¹⁴

Su muerte, con las armas en las manos, en el palacio presidencial, significa la recurrencia en el momento supremo a esa vía para la cual las fuerzas políticas que sustentaban la experiencia de cambio social no estaban preparadas.

Ello explica también que mientras Allende resistía en La Moneda, el Comité Político de la Unidad Popular, reunido en la industria Sumar de Santiago, acordaba no combatir. Así él fue fiel a su compromiso revolucionario; muchos de sus críticos no.

El general Carlos Prats comprendió cabalmente este comportamiento de Allende.

El combate de La Moneda —expresó el 21 de septiembre de 1973 en su diario— fue una lucha suicida, comparable a los más grandes gestos heroicos de la historia. La figura del presidente Salvador Allende, luchando hasta el último aliento, pasará a la historia.¹⁵

Es este episodio, sin lugar a duda, la coronación del héroe, en contienda desigual, como el comandante Arturo Prat en el combate naval de Iquique, durante la guerra del Pacífico.

Todos los medios

¿Queda todo dicho con el análisis anterior? De ninguna manera. Esta es la crisis social y política más grande de Chile en el siglo XX, a la vez que la mayor derrota de su pueblo, lo que la constituye en fuente inagotable de enseñanzas para las luchas del porvenir. Por ahora sólo podemos referirnos a dos órdenes de problemas en torno a los cuales han girado principalmente las críticas y autocríticas en la izquierda. Sin embargo, es preciso recordar antes que las revoluciones son procesos colectivos impulsados por agudas luchas de clases que comprometen la acción de millones de seres humanos, tras la conquista del poder. El éxito de estos procesos no depende, por lo tanto, de la voluntad de un solo hombre, sino de la conciencia y decisión de las masas en condiciones objetivas favorables.¹⁶

La primera de las cuestiones por dilucidar es la viabili-

dad de la vía pacífica o legal hacia el socialismo. Al respecto, cabe advertir, por una parte, que la izquierda no eligió entre varias opciones el camino de las urnas en 1970, sino que éste fue el único abierto y posible entonces. Desde su lugar de oposición al sistema, con una fuerza electoral relativa, una clase trabajadora sin preparación para la lucha armada, con un ejército profesional vigilante, no podía hacer otra cosa que iniciar el proceso revolucionario conforme a la institucionalidad vigente. De otra parte, tampoco había vivido la experiencia como para desechar este camino sin intertarlo, con la sola enseñanza extraída de la lucha revolucionaria en otras latitudes.

No obstante, los hechos —ya no los prejuicios teóricos— comprobaron que los instrumentos institucionales y el ordenamiento jurídico burgueses no permiten dicho tránsito por la resistencia de la clase dominante. Ellos tienen por objeto la defensa, por todos los medios, del sistema capitalista. El gobierno popular, por consiguiente, al someter el desarrollo de su programa a dicha legalidad, se autolimitó y con ello selló su propia sentencia de muerte.¹⁷ A los que todavía sueñan con una revolución desarmada, es preciso recordarles que, a lo menos, la contrarrevolución nunca es pacífica ni legal.

La segunda de las cuestiones por despejar es la validez de las alternativas críticas que desde posiciones de derecha y de izquierda se formulan a la conducción del proceso. La primera reduce las causas de la derrota a una fundamental: la falta de una alianza centrista con la Democracia Cristiana, que habría podido consolidar al gobierno popular. La segunda resume también estas causas en una principal: la carencia de una política militar para neutralizar la acción conspirativa de las fuerzas armadas y, llegado el caso, enfrentarla con una fuerza armada popular. Los hechos históricos han dado respuesta a ambas eventualidades.

La alianza de la Unidad Popular con la Democracia Cristiana fue imposible porque los objetivos estratégicos de una y otra era antagónicos. Una alianza táctica habría sido deseable, pero la dirección de esta última no sólo se opuso a ella, sino que impulsó la desestabilización del gobierno y el golpe final, con todas sus consecuencias. Para viabilizar esa alianza habría sido necesario que la Unidad Popular paralizara el proceso de cambios revolucionarios, renunciando a sus objetivos socialistas antes de resolver la cuestión del poder. El resultado, de seguro, habría sido el mismo: la dictadura burguesa. No debe entenderse de lo anterior que, en ningún caso, el movimiento revolucionario puede contraer compromisos tácticos, sino más bien que en tanto no se resuelva la cuestión del poder toda concesión estratégica daña el proceso.¹⁸

La izquierda a su vez no tenía comprensión cabal del problema militar, pasando a constituir hoy una de sus principales preocupaciones. Ahora, parece claro que si bien es posible acceder al gobierno a través de las urnas, la defensa de las posiciones de poder conquistadas y el avance hacia el socialismo exigirán siempre la utilización de formas armadas. Ello supone preparar a las organizaciones políticas y al conjunto de las masas para sustituir, en un momento determinado, unas formas por otras. Tarea por demás difícil como quiera que se trata de enfrentar a un ejército profesional que, a medida que avanza el proceso revolucionario, se convierte en la última línea de resistencia de la sociedad burguesa. La brutal represión desatada prueba este aserto, sin perjuicio de las fracturas producidas en su seno.

Imperativo actual

De acuerdo a esta interpretación del desarrollo de Chile en la última década, el imperativo de hoy es impulsar el reagrupamiento del pueblo en torno a un nuevo proyecto nacional que combine la lucha por la democracia con la lucha por el socialismo. Este proyecto nacional supone el derrocamiento de la dictadura por la acción de las masas, empleando todos los medios y formas de combate. Para ello se requiere una poderosa fuerza socialista conjuntamente con una izquierda unida. Este es también el legado del compañero Salvador Allende, la bandera que él nos entregó el 11 de septiembre de 1973, en el marco de la continuidad de las luchas populares.

NOTAS

1. Isaac Deutscher: *La revolución inconclusa*, Ediciones ERA, México, D.F., 5a edición, 1956, p 18.
2. Citado por Julio César Jobet, Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1951, p 176.
3. *Ibid*, p 177.
4. Eugenio González. *Fundamentación Teórica del Programa del Partido Socialista de 1947*, Caminos de Libertad, México D. F. 1979, p 47.
5. *Ibid*, p 46

6. Belarmino Elgueta, *La historia como guía para la acción*, México D. F. 1980, mimeo. Este estudio es un proyecto de periodización de los últimos 100 años del desarrollo chileno.
7. Carlos Prats, *Una vida por la legalidad*. Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1976, p 87.
8. no está
9. no está
10. José Ortega y Gasset, *Mirabeau o el político*. Revista de Occidente, Madrid, 1974, p 21.
11. Salvador Allende, *La vía chilena al socialismo*, mesa redonda, Siglo XXI Editores, México DF., 1973, p 3.
12. Salvador Allende, *12 Discursos sobre América Latina*. Casa de Chile, México, 1978, p 128.
13. Regis Debray, *Conversaciones con Allende*, Siglo XXI Eds, 5a edición, México D. F., 1973.
14. Pedro Vuskovic, *Una sola lucha*, Editorial Nuestro Tiempo, México D. F., 1978, p 70.
15. *Ibid*, p 92.
16. Raúl Ampuero, "Militares y políticos en la crisis chilena del 73" *Le monde diplomatique*, en español, 1980.
17. Eduardo Novoa. *Vía legal hacia el socialismo*. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1978. Este eminente jurista chileno niega dicha posibilidad a la luz del proceso 1970-1973.
18. Kiva Maidanik: "En torno a las enseñanzas de Chile": *América Latina* núm. 2, Moscú, 1975, p 99 en adelante. Excelente análisis, en el que demuestra que esta alianza era imposible en las condiciones.